PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE NUEVO LEÓN A INVESTIGAR AL EX ALCALDE DE MONTERREY Y AL EX DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, POR PRESUNTAS RESPONSABILIDADES EN EL INCENDIO DEL CASINO ROYALE DEL DIP. JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El suscrito Diputado. **JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ**, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente **Punto de Acuerdo** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El día 25 de agosto del 2011, tuvo lugar un ataque terrorista en Monterrey, cuando un comando armado roció gasolina al interior del casino Royale, provocando un incendio que dejó un saldo de 52 muertos. Ese ataque es sólo una muestra de la escalada de violencia y barbarie que vivió el país durante la llamada “guerra contra el narco” impulsada por el presidente Calderón, periodo en el cual, varios grupos de la delincuencia organizada atentaron contra la población para crear estados de terror colectivos, y poniendo en evidencia la inoperancia de las políticas de seguridad y combate a la delincuencia propugnadas por el gobierno.

A raíz del atentado, y según peritajes de la PGR, se supo que las instalaciones del casino no contaban con todas las medidas de seguridad necesarias para casos de incendio, y que la empresa operaba de forma irregular, ya que sus permisos no cumplían con las normas administrativas en materia de juegos y sorteos supervisadas por la Secretaría de Gobernación.

Las investigaciones arrojaron en un principio que este centro de apuestas era operado por las personas morales Cyma Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV en sociedad, con permisos irregulares del Municipio de Monterrey.

En los días posteriores a la tragedia, Juana María Treviño Torres, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, responsabilizó a Protección Civil de Monterrey, cuyo titular en ese momento era Jorge Camacho Rincón, por no verificar la ausencia de salidas de emergencia en el inmueble.

A raíz de la tragedia, y ante la presión de los ciudadanos, el Congreso de Nuevo León creó en octubre de 2011 una “Comisión de la Verdad” para, supuestamente, castigar a quienes habían autorizado la operación del casino. Los resultados del trabajo de dicha comisión fueron la presentación de iniciativas y un marco legal para los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de evitar que se vuelvan a presentar casos similares en el país por negligencia de las autoridades.

Pero, a pesar de haber citado a comparecer a funcionarios de varios niveles, como el director de Protección Civil estatal, la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, por la sospecha de permisos irregulares, no se dictó sanción alguna contra ningún funcionario, ni siquiera la separación de su cargo.

El mes de abril de este año, fue detenido el último prófugo de la justicia que participó en el atentado. Las autoridades federales y estatales presumieron la captura de todos los responsables materiales, ligados con el grupo delictivo “Los Zetas”. Sin embargo, hasta el momento, los funcionarios estatales y municipales que autorizaron la operación del casino, permanecen impunes. Entre ellos, sobresalen, por supuesto, el ex alcalde de Monterrey y el entonces director de Protección Civil.

El sistema de justicia en México vive la paradoja de la impunidad: el culpable sale libre, mientras el inocente paga. Todos y todas pagamos por la irresponsabilidad del poder público de quienes al amparo de la corrupción siguen enriqueciéndose y manteniéndose lejos de rendir cuentas ante la ley. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que investigue al ex alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal y al ex director de Protección Civil, Jorge Camacho, por presuntas responsabilidades en el incendio del Casino Royale.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León para que rinda un informe detallado de las investigaciones y sanciones que se han impuesto con motivo de los delitos cometidos.

ATENTAMENTE.

Dip. Jorge Álvarez Máynez

"Casino Royale, sin permisos ni medidas de seguridad suficientes: peritaje de la PGR", La Jornada, Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2011/09/13/politica/013n1pol>.

"Apuestan a la impunidad", Reporte índigo, Disponible en: <http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/apuestan-la-impunidad>.

"Apuestan a la impunidad", Reporte índigo, Disponible en: <http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/apuestan-la-impunidad>.

"Autoridades de NL detienen al último de los responsables del ataque al Casino Royale", Sinembargo, Disponible en: <http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645723>.